

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**  
**Medellín, doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)**

DEMANDANTE	: BLANCA ROCIO RIOS NARANJO
DEMANDADO	: COLPENSIONES, y PROTECCION S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-020-2021-00422-01
RADICADO INTERNO	: 283-22
DECISIÓN	: REVOCA, ADICIONA, Y CONFIRMA SENTENCIA.
ACTA NÚMERO	: 360

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

La parte demandante solicita se DECLARE la ineficacia del traslado realizado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado en su momento por Colmena Cesantías y Pensiones hoy Protección S.A. y se DECLARE que se encuentra válidamente afiliada al régimen de prima media con prestación definida administrado actualmente por Colpensiones sin solución de continuidad, y qué le asiste derecho a pensionarse por vejez bajo las reglas establecidas en la ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003, y como consecuencia se condene a Protección a trasladar los aportes en pensiones realizados por el asegurado, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales con todos sus frutos e intereses, esto es, con los rendimientos que se hubieren

causado y se CONDENE a Colpensiones a validar los aportes que sean trasladados e incorporarlos a la historia laboral del asegurado y se CONDENE a colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en las condiciones del régimen de prima media con prestación definida, de forma retroactiva y con mesadas adicionales, los intereses moratorios o la indexación, y las costas del proceso

Como supuestos facticos manifestó que nació el 12 de diciembre de 1962 y a la presentación de la demanda cuenta con 58 años de edad, el 25 de abril de 1984 comenzó a realizar sus cotizaciones al régimen de prima media a través de su vinculación laboral con el empleador informática Ltda. Qué no es y nunca fue beneficiaria del régimen de transición, y que realizó traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual suscribiendo formulario de afiliación el 8 de abril de 1996 con efectividad a partir del 01 de junio de la misma anualidad, afiliación que no contó con una asesoría en el sentido estricto, ni se le dio un diagnóstico pensional teniendo en cuenta su situación laboral específica, donde se le dieran a conocer las posibles ventajas y desventajas comparativas de estar afiliada a un régimen privado vs el régimen de prima media con prestación definida. Qué Protección S.A. omitió poner en conocimiento de la demandante de manera amplia, suficiente, completa, veraz e imparcial, tanto al momento de su afiliación como en el transcurso de esta, información trascendental para configurar un consentimiento informado y oportuno en aspectos como, la forma en que se calculan las pensiones en cada uno de los regímenes pensionales, las modalidades de pensión en el régimen de ahorro individual, el esquema multifondos, las características propias de cada régimen para acceder al derecho pensional.

Que además no recibió reasesoría antes de cumplir los 47 años de edad y el 24 de julio del 2019 previa solicitud recibió simulación pensional de Protección S.A, cálculo en el cual se le indica que para los 57 años de edad en el régimen de ahorro individual podrá acceder a la garantía de pensión mínima, y precisa además que si la demandante hubiese sido asesorada correctamente desde el primer momento por Protección S.A permanecería en el régimen de prima media lográndose pensionar en mejores condiciones y mediante un valor de pensión fijo. Que el 28 de enero del 2021 realizó reclamación administrativa de traslado y reconocimiento de pensión de vejez a Colpensiones la cual fue

resuelta de forma negativa por faltarle menos de 10 años para pensionarse y qué realizó cotizaciones hasta el mes de julio del 2020, período para el cual presenta retiro realizado por el empleador universidad de caldas.

### **RESPUESTA COLPENSIONES**

Esta entidad dio respuesta manifestando que acepta la edad del demandante, fecha de afiliación al ISS, así como la reclamación presentada ante dicha entidad y la respuesta negativa a la misma, no aceptó los demás hechos, se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones las de inexistencia de nulidad y/o ineficacia en el traslado de régimen, saneamiento de la nulidad relativa alegada por la parte demandante aduciendo que fue inducida en error, buena fe de Colpensiones, prescripción, imposibilidad de condena en costas, y la innominada o genérica.

### **RESPUESTA PROTECCION S.A**

Al dar respuesta a la demanda manifiesta que acepta la edad de la demandante y que esta no es beneficiaria del régimen de transición, aceptó igualmente la petición presentada a dicha entidad y la respuesta dada a la misma, frente a los demás hechos manifestó no ser ciertos, se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones y propuso como excepciones las de Inexistencia de la Obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento Indevido de los Recursos Públicos del Sistema General de Pensiones, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, y la innominada o genérica.

### **SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA**

En sentencia del 23 de junio de 2022, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, DECLARO ineficaz el traslado de la señora BLANCA ROCÍO RÍOS NARANJO, del Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPMPD, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS-, por falta de consentimiento informado, lo que conllevó a un error en el consentimiento del

demandante al momento de afiliarse al régimen administrado por la AFP PROTECCIÓN S.A, en razón a que su decisión no fue libre y voluntaria. DECLARÓ que la afiliación al Régimen de Prima Media de la señora BLANCA ROCÍO RÍOS NARANJO, no ha tenido solución de continuidad en el tiempo en el que ha estado activamente vinculada al Sistema General de Pensiones. CONDENÓ a PROTECCIÓN S. A. que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que quede en firme la providencia, traslade con destino a COLPENSIONES el cien por ciento (100%) de los aportes efectuados por la demandante, y cualquier otro valor que se encuentre en su cuenta de ahorro individual, incluidos los frutos y rendimientos financieros que sobre los mismos se hubieren causado, asumiendo con cargo a su propio patrimonio los conceptos de comisiones de administración, el valor de las pólizas previsionales, lo descontado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que hubieran sido deducidos desde la fecha en que se hizo efectiva la afiliación de la demandante a esa administradora, y hasta la fecha en que se haga efectivo el traslado de régimen pensional, valores que deberán ser debidamente indexados.

CONDENÓ a COLPENSIONES a recibir los aportes que PROTECCIÓN S. A, le devuelva como resultado de la ineficacia decretada, y a tener en cuenta el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por la demandante, como semanas cotizadas que deberán reflejarse en su historia laboral. CONDENÓ en costas a PROTECCIÓN S. A, y fijó como agencias en derecho la suma de 2 SMLMV. Y ABSOLVIO a COLPENSIONES del pago de costas procesales.

CONDENÓ a COLPENSIONES en los términos del artículo 21, 33 y 34 de la ley 100 del 1993 modificada por la ley 797 del año 2003 a reconocer y pagar la pensión de vejez de la señora BLANCA ROCÍO RÍOS NARANJO, con fecha de causación **del 27 de noviembre de 2021**; presupuesto normativo bajo el cual acredita los requisitos necesarios para acceder al reconocimiento de dicha prestación económica; pensión que quedara supeditada a la liquidación que efectúe COLPENSIONES. ABSOLVIO a COLPENSIONES de las demás pretensiones incoadas en su contra, tratándose de los intereses de mora establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993.

## **IMPUGNACION**

**El apoderado de la parte demandada Colpensiones** presenta recurso de apelación manifestando que se debe revocar la sentencia de manera total pues indica que Colpensiones es un tercero ajeno a los negocios jurídicos celebrados entre la demandante y el fondo privado y que no puede verse perjudicado por el error en el que se vio inmerso la demandante ya que realizó su afiliación al fondo privado mediante actos libres y voluntarios, y por ende, sus manifestaciones son infundadas ya que no existió dolo o culpa y tampoco se ejerció ningún tipo de fuerza al momento de firmar el formulario de afiliación o que llevara a un ineficacia tal cómo se mostró en el proceso, por lo que resulta totalmente adversa la condena a Colpensiones en un asunto en que no tuvo injerencia alguna, más cuando recibiría para pensionar a una persona que no aportó al régimen de prima media y que se traslada de régimen, por lo que esto sería descapitalizar al mismo régimen pues los aportes que perciben del fondo de ahorro individual, son dineros deteriorados por el paso del tiempo y que al momento en que la demandante se haga acreedor de una pensión de vejez será insuficiente los fondos, descapitalizado así el régimen. Solicita además tener en cuenta el interrogatorio de parte absuelto por la demandante ya que según este de él se denotan algunas circunstancias de las que se derivan que, si recibió la suficiente información por parte del régimen de ahorro individual y que además contaba con el consentimiento y ánimo de permanecer al fondo privado y no en Colpensiones, y que solo fue la inconformidad monetaria lo que impulsó a solicitar el traslado de régimen. Que además se debe tener en cuenta la fecha del retiro del sistema visualizando una historia laboral actualizada y en lo referente a las cuotas de administración solicita en caso de que se confirme la ineficacia del traslado por la conducta indebida de los fondos del régimen de ahorro individual que se ordene devolver dichas sumas con cargo a sus propios recursos.

## **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

El apoderado de Colpensiones indica que lo consagrado en la demanda no son negaciones indefinidas y por lo tanto es a la parte actora a quien le correspondía probar los supuestos de hecho esbozados en la misma, y que por lo tanto era menester que la parte demandante ejerciera el despliegue probatorio atinente a demostrar insuficiencia en la información por parte de la

AFP, aspecto que en modo alguno logra satisfacerse únicamente con la declaración de parte, lo que deriva en la asunción del riesgo de no haber probado, que se traduce en desestimar las pretensiones.

Que además el afiliado de la seguridad social no se halla ante una imposibilidad probatoria, porque la experiencia ha enseñado que en los juicios en los que se ha deprecado ineficacia de traslado de régimen pensional, con antelación al año 2019<sup>4</sup>, los demandantes acudían con testigos o hacían sus esfuerzos probatorios en aras de satisfacer la carga que les correspondía, y, aun así, en forma mayoritaria, obtenían el pretendido traslado; luego, no se trata de hechos imposibles.

Que, primero el demandante debe probar que hubo un incumplimiento del deber legal por parte de la AFP, para que la carga de la prueba se desplace hacia la orilla del demandado, aspecto que como viene de manifestarse, no ocurrió, por lo que corresponde al juzgador acudir a las reglas que regulan la carga estática de la prueba.

Que para el caso en concreto, se observa que el legislador no definió exactamente el estándar de prueba para el proceso laboral, lo que implica que es al juez, en cada caso concreto, con base en los medios de prueba regular y oportunamente allegados a la causa judicial, a quien le pertenece, en el ejercicio de su autonomía, la valoración de la prueba y deducir si una proposición fáctica se encuentra probada, según los artículos 60 y 61 del CPT y SS y 164 y 176 CGP<sup>7</sup>, por lo que indica que no le es debido a la Corte fijar en forma estandarizada el baremo, nivel o intensidad que se debe satisfacer por los llamados ajuicio en los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Que además no es procedente el traslado por faltarle menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, y que dicho periodo de carencia ya fue objeto de declaratoria de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional el cual prevé además la capitalización del sistema.

Que en razón de lo anterior el traslado entre regímenes pensionales encontrándose el afiliado a diez años o menos de la edad mínima pensional,

sólo se encuentra autorizado para los beneficiarios del régimen de transición, que accedieron a este por medio del tiempo de servicio o cotizaciones (Corte Constitucional, sentencias C-789 de 2002, SU- 062 de 2010 y SU – 130 de 2013), por lo que la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional de un contingente de personas con características diferentes a las dispuestas por la Corte Constitucional, pone en peligro la sostenibilidad financiera del sistema, a la par que pondría en riesgo el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados (Arts. 48 y 334 de la Constitución Política de Colombia; exposición de motivos del Proyecto de Ley 56 de 2002 Senado, que luego se convirtió en el artículo 2° de la Ley 797 de 200312 y Corte Constitucional en sentencias C-1024 de 2004 T – 489 de 2010 y SU-062 de 2010).

Por ultimo indica que en el evento en que se confirme la sentencia solicita que se ordene a las Administradoras del régimen de ahorro individual, para que, a favor de Colpensiones, realice la devolución integral de las cotizaciones efectuadas por la parte demandante, sin descuento alguno, durante la permanencia en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, precisando los conceptos a reintegrarse y un término perentorio para para el reintegro de los recursos.

### **PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO**

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar: i) Si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; ii) Si hay lugar a trasladar, las cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora tales como la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, lo descontado para el fondo de garantía de pensión mínima y si las mismas deben trasladarse de forma indexada, y en consulta a favor de Colpensiones si hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en el RPM.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que la demandante nació el 05 de diciembre de 1962, (fls 16 de la demanda, PDF 02), y se afilió al ISS hoy COLPENSIONES desde el 25 de abril de 1984, (fls 38 de la contestación de Protección S.A), y se trasladó de forma efectiva a Colmena hoy Protección S.A a partir del 01 de junio de 1996 (fls 36 de la contestación de Protección S.A).

Descendiendo al caso particular, se tiene que, en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por la accionante, no se evidencia confesión alguna, pues esta indicó que se trasladó al fondo privado pues indica que con la ley 100 les indicaron que se debían trasladar a dichos fondos, y que el traslado se dio a través de la oficina de gestión humana de la universidad de Caldas, que no recuerda muy bien cómo se dio el traslado, que no recuerda al asesor que le hizo la afiliación, que nunca se acercó a protección a recibir información pensional, que solo recibía los estratos, que nunca se acercó a una oficina y tampoco la visitaban o la asesoraban, que no le dijeron que pasaría con las semanas que tenía cotizadas con la universidad de Caldas.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

### **1. De la ineficacia del traslado**

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”*, y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará*



*acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa “... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES.** Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados-** en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...”.** (Resalto fuera del texto)

**“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES.** Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

*“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;....”.*

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y

comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aún operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877 y 4811 de 2020, y como juez constitucional en las sentencias STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada Colmena hoy Protección S.A., no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, cuando tomó la decisión de vincularse a dicha entidad, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se genera que se haya violentado el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvieron efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, **son imprescriptibles** y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad accionada, hoy aporte, historial de vinculaciones, certificado de afiliación, relación histórica de movimientos, historia laboral, formulario de afiliación; lo que lleva a concluir que, al momento de trasladarse al RAIS, **no les dieron una información completa y suficiente.**

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración de la ineficacia del traslado; y confirmar la orden dada de trasladar a los aportes efectuados por la demandante, incluidos los frutos, rendimientos e intereses.

## **2. De los efectos de la ineficacia**

Esta Sala ha sido de la posición, que los conceptos que deben ser trasladados a Colpensiones en los eventos en que se declare la ineficacia del traslado corresponde a los siguientes:

**1º. Capital ahorrado:** Conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 y con fundamento en las sentencias SL 31.989 de 2008, SL 4964, SL 4989 de 2018, SL 1421, SL 1688, SL 1689 y SL 4360 de 2019.

**2º. Rendimientos:** En igual sentido este concepto se traslada de conformidad con el art. 113 ídem que señala *“Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos ...”*, y tiene como sustento jurisprudencial las sentencias enunciadas en el numeral anterior.

**3º. Los gastos de administración,** encuentra su sustento normativo en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 cuando señala: *“... el 3% restante se destinará a*

*financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.”, traslado que tiene sustento en lo siguiente:*

**En lo que respecta a los gastos o cuotas de administración debidamente indexados,** hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece la sentencia SL 1688 , 1689 de 2019 y SL 782 de 2021 y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos o pagos posteriores a la cotización realizada no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al RAIS, 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron a la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliada la parte demandante en esta, en tanto que la cuota de administración es manejada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver ***“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”***; así mismo, la sentencia SL 3464 de 2019, que rememora las sentencias SL 31989 de 2008, SL 4964 y SL 4989 de 2018, SL 1421 y SL 1688 de 2019 ordena el traslado de este concepto; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

La orden que las cuotas de administración se trasladen debidamente indexadas se extrae de la sentencia SL 1688 de 2019, que dijo expresamente:

*“Está probado que la AFP accionada consignó al ISS, hoy Colpensiones, los aportes que la demandante tenía en su cuenta individual con sus rendimientos (f.º 98 a 101), sin embargo, no existe constancia de que hubiese devuelto también los valores correspondientes a **gastos de administración**, los cuales según se expuso en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, debe asumir con cargo a sus propios recursos.*

*En tal sentido, **se ordenará a la AFP accionada la devolución de esos dineros, debidamente indexados.**” (Resalto fuera del texto)*

**Y la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes**, deberán devolverse **debidamente indexada**, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3571 de 2021 se expuso en lo que nos interesa: *“... se adiciona el ordinal segundo en el sentido de condenar a Colfondos SA a trasladar, también, ... y los valores utilizados en seguros previsionales, con destino a Colpensiones, debidamente indexados, por cuanto la restitución de las cosas a su estado anterior debe ser plena o completa (CSJ SL2877-2020)”*

Conceptos que **no prescriben** teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar. En igual sentido, se ha pronunciado las sentencias SL 373 de 2021 y SL 4062 de 2021.

**4º. Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el traslado de estos aportes se encuentra igualmente consagrado en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 porque al tratarse de un aporte propio del Régimen de Ahorro Individual, no encuentra un equivalente en el Régimen de Prima Media, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al Régimen de Prima Media bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016; traslado que tiene como sustento jurisprudencial la sentencia SL 2877 de 2020.

Para concluir, en sentencia reciente SL 3051 del 7 de julio de 2021, se engloba la obligación que tienen las entidades del Régimen de Ahorro Individual de trasladar los conceptos referidos anteriormente, al señalar: *“Por esto mismo, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJ SL2877-2020, CSJ SL4811-2020 y CSJSL373-2021). Criterio que igualmente aplica en relación con los montos destinados a seguros previsionales y el porcentaje destinado a conformar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tal como se precisó en recientes sentencias (CSJ SL2209-2021 y CSJ SL2207-2021).”*

Y no sobra manifestar, que esta Corporación considera que el principio de sostenibilidad financiera no se violenta con la declaración de la ineficacia del traslado, porque si los efectos del traslado es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban y entre ellos, se integra la devolución en forma plena y retroactiva, con esta decisión se está protegiendo la sostenibilidad de Régimen de Prima Medía. Aunado a ello, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2877 de 2020 se pronunció al respecto, señalando:

*“Asimismo, la decisión que se controvierte en casación tampoco lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del sistema general de pensiones, puesto que los recursos que deben reintegrar los fondos privados accionados a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento del derecho pensional, con base en las reglas del régimen de prima media con prestación definida, lo que descarta la posibilidad de que se generen erogaciones no previstas.”*

Ahora, de conformidad con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia entre otras en sentencia SL 896 del 23 de marzo de 2022, se ADICIONARÁ la sentencia de primera instancia en el entendido de que al momento de cumplirse la orden del traslado de la totalidad de los dineros que a título de aportes fueron pagados por el demandante y sus empleadores, junto con los rendimientos financieros que se hubiesen producido, y demás integrantes de su cuenta de ahorro individual, con las cuotas de administración, comisiones,

aportes al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, primas para seguros previsionales o cualquier otra causa, debidamente indexados, **los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.**

### **3. Del reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de Colpensiones.**

Ahora, con respecto al derecho a la pensión de vejez solicitada en la demanda debe decirse que se extrae de los certificados laborales e historia laboral allegada al plenario, que la demandante a laborado al servicio de la universidad de Caldas desde el mes de junio de 1989, (fls 43, PDF 07 contestación de Protección S.A), por lo que por auto del 15 de noviembre de 2022 se dispuso reabrir el debate probatorio y REQUERIR a la UNIVERSIDAD DE CALDAS a efectos de que informara cual es la calidad que ostenta la señora BLANCA ROCIO RIOS NARANJO, ello es, si se desempeña como trabajador oficial o como empleado público durante el tiempo en que se le realizaron las cotizaciones a la seguridad social, en caso que aun labore en la entidad, o en el evento que ya no se encuentre vinculada a la misma, informara cual fue el último cargo que ostentó al momento del retiro, ello es, si empleado público o trabajador oficial.

Ante lo anterior se recibió respuesta de la entidad mediante escrito del 22 de noviembre de 2022 en la cual se informa lo siguiente:

“LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA Certifica que la señora BLANCA ROCÍO RÍOS NARAJÓ identificada con cédula de ciudadanía No. 30291788, labora en esta Universidad **con vinculación como Empleada Pública** Administrativa (carrera administrativa) desde 14 de junio de 1989 con vinculación a término indefinido. Actualmente se desempeña en el cargo como SECRETARIA EJECUTIVA adscrita a la FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES – PROGRAMA DE FILOSOFÍA Y LETRAS.

La presente certificación se expide a solicitud de la Sala Laboral Tribunal Superior de Antioquia – Medellín con Radicado N°05001 31 05 020 2021 00422 01”

Partiendo de lo anterior, si bien la juez de primera instancia le ordenó a Colpensiones, a activar la afiliación de la demandante al régimen de prima media, sin solución de continuidad y a reconocer y pagar la prestación de vejez, observa esta Sala que al tener la **demandante la calidad de empleada pública**, carece la justicia ordinaria de competencia para resolver de la pensión de vejez, porque de acuerdo con el numeral 4° del art. 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual consagra: *“La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa... Los relativos a la relación legal reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y la seguridad social de los mismos cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.”*, es por lo que se concluye la falta de competencia de esta Sala para resolver la misma.

Así las cosas, esta Sala se REVOCAR la decisión de primera instancia que ordenó a Colpensiones reconocer la pensión de vejez, para en su lugar **ABSTENER** de realizar pronunciamiento alguno frente al reconocimiento de la pensión de vejez y sus pretensiones consecuenciales, por carecer de jurisdicción.

Por lo anterior lo legal y pertinente será ADICIONAR, REVOCAR Y CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín.

Sin costas en esta instancia.

### DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,



**RESUELVE:**

**PRIMERO: ADICIONAR** la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, en el entendido de que al momento de cumplirse la orden del traslado de la totalidad de los dineros que a título de aportes fueron pagados por el demandante y sus empleadores, junto con los rendimientos financieros que se hubiesen producido, y demás integrantes de su cuenta de ahorro individual, con las cuotas de administración, comisiones, aportes al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, primas para seguros previsionales o cualquier otra causa, debidamente indexados, **los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen,** según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: REVOCAR** la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, en lo atinente a que ordenó a Colpensiones reconocer la pensión de vejez, para en su lugar **ABSTENER** de realizar pronunciamiento alguno frente al reconocimiento de la pensión de vejez y sus pretensiones consecuenciales, por carecer de jurisdicción.

**TERCERO: CONFIRMAR** en todo lo demás la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

**CUARTO:** Sin costas en esta instancia.

**QUINTO:** Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-020-2021-00422-01  
Radicado Interno 283-22



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**SECRETARÍA SALA LABORAL**  
**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: BLANCA ROCIO RIOS NARANJO
DEMANDADO	: COLPENSIONES, y PROTECCION S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-020-2021-00422-01
RADICADO INTERNO	: 283-22
DECISIÓN	: REVOCA, ADICIONA, Y CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 13 de diciembre de 2022 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 13 de diciembre de 2022 a la 5:00pm

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
SECRETARIO